

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Fundación Heinrich Boell, que me ha distinguido con la participación en este evento. Esta participación me honra en lo personal, pero también como ciudadano latinoamericano. Y estoy convencido de que el Partido Verde alemán es uno de los interlocutores privilegiados en estos intercambios entre Europa e Iberoamérica. Porque quién es verde en Alemania comparte con muchos latinoamericanos la certeza de que estamos en un final de época, que ya estamos viviendo una crisis de civilización, que esta sociedad y su modelo tradicional de organización y de relaciones con la naturaleza está agotado, así como su política. Y, al mismo tiempo, reconocemos con realismo que vivimos en una temporalidad política concreta que exige tomar decisiones y actuar positivamente en el corto plazo, con los actores y con la cultura política que allí están.

Tanto en términos personales como intelectuales me gusta mucho tender puentes. Es la segunda vez que vengo a Berlín, y por segunda vez me acompaña un libro para orientarme en la cotidianeidad de esta ciudad de leyenda. Se trata de “O verde violentou o muro”, del escritor brasileño Ignacio de Loyola Brandão, que durante un año vivió en Berlín, con una beca del DAAD, en 1982. Y registró sus memorias impresionistas y al mismo tiempo muy agudas, de esta ciudad y de ese momento alemán, en un libro. Y quiero traer para ustedes lo que Ignacio de Loyola Brandão escribió en ese libro, donde el Partido Verde, como novedad crítica, aparece en el propio título: *“Lo que me seduce de Alemania es su ambigüedad, sus paradojas y su vitalidad. Una estructura rígida, compleja, conservadora, convive y admite bolsones que funcionan como anticuerpos, conciencias, estados de alerta. Creo que pocos países alimentarían un movimiento como el de los Verdes o algo parecido. Son los ojos abiertos de Alemania”*.

Voy a hablar aquí de los países que componen Iberoamérica continental. La convocatoria que nos reúne es ya suficientemente compleja para el tiempo limitado de que disponemos, y dejaré de lado, entonces, a los países de habla inglesa del Caribe, así como a la curiosa Francia de ultramar, a Cuba, que de por sí daría una larga conversación, y a Haití, que soporta desde hace años una lamentable ocupación militar. De la región del Caribe sólo entrará aquí, de alguna forma, la República Dominicana.

Para comenzar, quiero llamar la atención para el hecho de que todos estos países están en estos momentos gobernados democráticamente, a través de regímenes formalmente republicanos. Eso no nos impedirá, sin embargo, de marcar diferencias entre ellos. A pesar de esta homogeneidad formal, coexisten en la región orientaciones marcadamente diferenciadas, con varios países que han

procesado y están procesando lo que podríamos llamar **procesos de rearticulación selectiva**, en el ámbito internacional/global y en el ámbito regional latinoamericano.

Estos procesos han surgido como iniciativas propias, pero también como reacción frente a los intentos hegemónicos de Estados Unidos, desde la época de Bush padre, en 1990, de establecer “un área de libre comercio unificada de Alaska a la Patagonia”. A lo largo de dos últimas décadas, han proliferado en la región los acuerdos de integración económica (con o sin Estados Unidos) y los acuerdos constituyentes de entidades políticas supranacionales (en este caso, siempre sin Estados Unidos).

Digamos que hacia el cambio de siglo, luego de la homogeneidad de orientaciones de política económica marcadas por la inspiración neoliberal y por el acatamiento a las directivas de los organismos internacionales y a las señales imperativas de los mercados, varios países de la región acabaron atravesando crisis políticas y económicas, que tuvieron como resultado llevarlos a posiciones “díscolas” en relación a la ortodoxia económica vigente en la década anterior, y que dieron origen a estos procesos que llamamos de rearticulación selectiva.

En algunos casos, las crisis políticas y económicas detonaron fenómenos que un gran sociólogo boliviano, René Zavaleta Mercado, llamó “crisis social general”, cuando frente al carácter de los antagonismos actuantes, se derrumban los principales mecanismos de poder institucionalizado. Fueron los casos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. En esos países, la crisis provocó el colapso de los partidos tradicionales y la desorganización de la representación de los sectores dominantes, y se siguió una reconstitución del escenario y las instituciones políticas a partir de la conformación de nuevos protagonistas, con nuevas aspiraciones programáticas. Estos países son también los más radicales y “díscolas” en relación a los procesos de rearticulación selectiva que están protagonizando.

Otras situaciones, en cambio, tienen (o tuvieron, en el caso de Chile) como protagonistas de la gestión de gobierno a coaliciones donde se destacan identidades políticas que provienen de importantes organizaciones de izquierda (armada o no) que tuvieron su apogeo en la década de 1970. Son los casos de Nicaragua, de Uruguay y de El Salvador.

El caso de Brasil es prácticamente único, donde la transición política no tuvo una performance crítica que desarticulase a las fuerzas tradicionales, y donde el liderazgo de la coalición reformista estuvo a cargo de una fuerza política nueva, el Partido dos Trabalhadores, pero que al incorporarse a posiciones reinantes en el sistema político incorporó también los rasgos metabólicos y las rutinas de la cultura

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

política tradicional. Una historia mucho más perturbada que la brasileña, pero que tuvo resultados aproximados es la del Perú. Y quizás habría que considerar en esta categoría a los dos casos que llamaremos de “regresión democrática”, con los presidentes siendo depuestos por el poder legislativo, Honduras y Paraguay.

La Argentina, como sucede con frecuencia, no entra con comodidad en las clasificaciones. Protagonizó en 2001/2002 una crisis social general de proporciones inusitadas, que implicó en una intensa activación de los movimientos sociales y en la desarticulación del sistema político. Sin embargo, un sector renovador, desde el interior de una fuerza política tradicional, fue capaz de reconstituir el orden institucional, y pasar a gobernar casi en ausencia de cualquier oposición efectiva.

Con marcadas diferencias entre sí, es cierto que estas diversas experiencias nacionales tienen rasgos comunes. Pero lo que quizás sea lo más importante (y difícil de evaluar para un observador no latinoamericano) sea la forma inédita en que estos diferentes gobiernos se identifican entre ellos como aliados, de la misma forma en que sus opositores internos (por ejemplo, la participación de políticos de la oposición argentina en la campaña electoral de la oposición de Venezuela, en las recientes elecciones del 7 de octubre de 2012).

Podemos enumerar rápidamente rasgos comunes entre las orientaciones políticas y económicas de estos gobiernos. En primer lugar, luego de largos años de predominio de orientaciones neoliberales, han tratado, con éxito variable, de reconstruir la capacidad estatal para la regulación económica y para la aplicación de instrumentos de políticas públicas, lo que supone también una recalificación de los servidores públicos. A partir de allí, han intentado superar la contraposición clásica entre crecimiento económico y distribución. *“Descartamos la idea de primero crecer y luego distribuir. El objetivo fue crecer y distribuir al mismo tiempo. Lo importante es que el Estado regule en la medida apropiada para que las empresas puedan prosperar”*, definió el ex presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva en una reunión con los grandes empresarios argentinos, el 17 de octubre de 2012.

Estas políticas, que han sido relativamente exitosas en términos de crecimiento y de inclusión social, fueron complementadas a partir de 2008 por intentos de preservar el nivel de actividad económica y de empleo frente a la crisis internacional. Lo han conseguido en parte, pero con éxito decreciente, en tanto la economía internacional continua en recesión.

Un complemento de esta configuración iberoamericana ha sido la proliferación de nuevas coaliciones, políticas y comerciales. Por un lado, el conjunto de los países sudamericanos, incluyendo allí a las ex Guayanas inglesa y holandesa

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

(pero obviamente no al territorio francés de ultramar) crearon en 2008 la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), una organización política que desempeñó papeles silgnificativos en la neutralización de intentos golpistas en Bolivia y Ecuador, en negociaciones sobre los conflictos colombianos, en la oposición a los golpes institucionales en Honduras y Paraguay, y que ha instituído en 2010 el Consejo de Defensa Sudamericano. Otra instancia de integración política regional es la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), creada también en 2010. Estas organizaciones, que excluyen a los Estados Unidos y a Canadá, han venido a “vaciar” efectivamente a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se ejercía tradicionalmente la hegemonía norteamericana sobre la región.

Es importante señalar que existen por detrás de estas nuevas instituciones otros organismos de alcance regional que están constituyendo una nueva arquitectura financiera. Además de la ya tradicional Corporación Andina de Fomento (CAF), se ha creado el Banco del Sur, como banco de inversiones formado por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador Paraguay, Venezuela y Uruguay, existe un Fondo Latinoamericano de Reservas y se ha implementado el SUCRE, un sistema de compensación monetaria para facilitar los intercambios entre los países por fuera del dólar.

Otro camino ha sido el de la integración económica, que hasta el momento debe ser llamada, con más propiedad, comercial. En la conferencia de Mar del Plata, en octubre de 2005, fracasó el intento de Estados Unidos de instituir un área de libre comercio continental (ALCA), básicamente por la oposición de Argentina y Brasil. A partir de allí, Estados Unidos operó por negociaciones bilaterales, con el resultado de que la unión política regional está polarizada en términos económicos. México, América Central y Caribe, Colombia, Perú y Chile participan en acuerdos comerciales con Estados Unidos, que se proyectan también en la Comunidad del Pacífico. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela integran el Mercosur, que eventualmente podrá incorporar a Bolivia y Ecuador. Alrededor de Venezuela se conformó la ALBA (Alianza Bolivariana), que incluye a Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y países del Caribe ex británico. Estos acuerdos son básicamente comerciales, y por diferentes motivos poco se ha avanzado en integración intra-industrial (a no ser en casos puntuales, como la industria automovilística en Argentina y Brasil) y en desarrollos científicos y tecnológicos conjuntos (también entre Argentina y Brasil).

De forma un poco esquemática, digamos que esta nueva configuración regional, positiva en sí misma, corresponde también a una redefinición de hegemonías, con la proyección regional de Brasil. Al mismo tiempo que, en asociación con Rusia, China, India y África del Sur (los denominados BRICS), Brasil

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

intenta una proyección en el orden global, sus intereses políticos y económicos (con frecuencia, estrategias empresariales respaldadas por la diplomacia estatal) se diseminan por los diferentes países de la región, en proyectos de obras públicas, de hidrocarburos, de biocombustibles, etc. Aprovechando los tratados de libre comercio, capitales brasileños están invirtiendo, por ejemplo, en la producción de biocombustibles en América Central y el Caribe para alcanzar el mercado de Estados Unidos.

Estados Unidos continua siendo el principal destino de las exportaciones latinoamericanas, absorbiendo el 40% de las mismas. Pero la participación de China en el comercio latinoamericano ha crecido impetuosamente en la última década, representando ahora el 9% del total del comercio de la región. Pero el 83% de las exportaciones latinoamericanas a China son productos primarios, como soja o mineral de hierro. Hasta un país relativamente industrializado de la región, como Argentina, importa de China un 98% de productos industrializados, mientras que sus exportaciones industriales a China son apenas 4,5% del total. El comercio con China ha impulsado una reprimarización de las economías latinoamericanas, inclusive de las más industrializadas. Mientras tanto, China ha establecido una dinámica política de inversiones directas, con la compra de tierras para proyectos agroindustriales, proyectos de megaminería, extracción petrolera, etc., que la han transformado en el tercer país en inversión directa en la región, después de Estados Unidos y los Países Bajos, y que se concentra en un 90% en actividades extractivas, especialmente hidrocarburos y minería. En 2010, según la CEPAL, China alcanzó a Europa como fuente de las importaciones latinoamericanas, y se espera que en 2012 la haya superado. La previsión de la CEPAL es que para 2016 China sea el segundo mercado de las exportaciones latinoamericanas.

Cuando el análisis avanza desde las configuraciones políticas a una observación desde un punto de vista de ecología política, se percibe que en realidad lo que caracteriza dramáticamente al conjunto de la realidad latinoamericana es una nueva dimensión en la explotación de los recursos naturales. En realidad, las orientaciones económicas básicas de estos gobiernos, vigentes sobre territorios con abundancia de recursos naturales y con gran demanda internacional, reafirma y profundiza la tradicional vinculación de la región con el sistema internacional, como proveedora de bienes primarios. Es este denominado **neo-extractivismo** la fuente fiscal de la inclusión social y de las políticas de redistribución de ingresos, en ausencia de cualquier progreso decisivo en la modificación de las desiguales estructuras de clases sociales, de poder y de ingresos resultantes de la misma.

“Necesitamos expandir la extracción de petróleo, establecer grandes proyectos mineros a cielo abierto o gigantescos latifundios productores de agro-combustibles

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

para poder construir hospitales o pagar bonos de inclusión social”, son los argumentos repetidos en los discursos oficiales. Esto refleja una política que se niega a avanzar, por ejemplo, en una reestructuración tributaria para modificar la base de financiamiento del Estado, o en intentos de modificar las pautas tradicionales de consumo suntuario de las oligarquías regionales. La política que trata de favorecer la inclusión social de sectores populares urbanos, construyendo al mismo tiempo redes de clientelismo para los gobiernos y sus aliados, se implementa, en gran parte, a partir de promover la exclusión social y la depredación ambiental en las áreas más ricas en recursos naturales. La propia UNASUR ha incorporado las propuestas de macro-recomposición territorial de la llamada IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que consiste en una trama gigantesca de vías de comunicación, proyectos energéticos y otras obras de infraestructura, facilitando procesos de explotación de la naturaleza para exportación. Pero estos grandes proyectos, que exigen enormes inversiones de capital y que están orientados hacia mercados externos, están creando, en realidad, nuevas relaciones de dependencia en relación a los poderes del orden internacional, lo que resulta en un panorama de riesgosa inestabilidad. Y no podemos dejar de señalar que ese neo-extractivismo supone la continuidad de un comercio ecológicamente desigual, donde los costos sociales y ambientales de la explotación y exportación de los recursos naturales no son contabilizados, son apenas “externalidades” del proceso económico. Grandes áreas territoriales son reorganizadas para la explotación de recursos naturales, arrasando a la naturaleza y violentando los derechos humanos de sus poblaciones, en lo que se ha dado en llamar “zonas de sacrificio”.

Es así que, desatados procesos macro-geográficos de reapropiación de la naturaleza e de reconfiguración de territorios, siempre con el respaldo de las instituciones estatales, la ocurrencia de conflictos ambientales aumenta año tras año en todos los países de la región, de la misma forma que su violencia. Al mismo tiempo en que la progresiva consolidación de instituciones democráticas parece haber superado las trágicas tradiciones de violencia política en la mayoría de los países de la región, los conflictos por la naturaleza se incrementan y se transforman, junto con la crisis urbana y el narcotráfico, en la mayor fuente de violación de derechos humanos.

En el momento actual, amargos conflictos se intensifican entre gobiernos que se definieron como “alternativos”, pero que reafirman la opción neo-extractivista exportadora de las economías, y las poblaciones afectadas por la degradación, destrucción o desapropiación de los recursos naturales básicos para su sobrevivencia. Nos referimos entre otros al caso del camino planeado dividiendo el

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

territorio indígena y reserva natural del Tipnis en Bolivia, a los conflictos causados por la gran minería y por la agricultura de soja transgénica en la Argentina, a los embates en Brasil por la construcción de grandes hidroeléctricas en la región amazónica, a la lucha indígena en Chile por la defensa de los bosques, a la crónica agonía de la sierra peruana por la lucha entre las comunidades agrarias y los mega-proyectos mineros, al movimiento contra grandes operaciones mineras y la defensa de los recursos hídricos en Ecuador, México, Guatemala, Panamá, Colombia... En muchos casos, los gobiernos responden con represión violenta, como fue el caso en junio de 2009, de la masacre de Bagua, en Perú, contra la movilización de los indígenas amazónicos en defensa de sus territorios. Si no se trata directamente de la represión militarizada, se han implementado, en países como Ecuador o Chile, mecanismos de criminalización judicial de la protesta social en el caso de conflictos ambientales.

Para referir apenas el caso de Brasil, en el año 2010 fueron registrados 853 conflictos agrarios, afectando a 70.000 familias campesinas, y provocando 34 muertes. Lo más significativo es que 200 de esos conflictos fueron provocados por el poder público, y 400 por el poder privado (hacendados, empresarios, minería, etc.). Es decir, se caracteriza una ofensiva del capital y del Estado contra el campesinado. En 347 de esos casos, las víctimas fueron lo que se denomina “poblaciones tradicionales”, grupos indígenas, afro-brasileños, habitantes de los bosques; es decir, las poblaciones de los espacios naturales, que están siendo acorraladas por los poderes de la llamada “modernización”

Además de estos grandes movimientos de reconfiguración territorial para la apropiación de recursos naturales, la región se ha transformado en campo privilegiado de aplicación de la llamada “economía verde”. La mercantilización de la naturaleza y la *comodificación* de los servicios ambientales avanza aceleradamente. Los mercados de carbono, iniciativas como la REDD+, etc., proliferan por todas partes, en especial en los últimos espacios naturales, como la Amazonia y la Selva Lacandona. Además de los fenómenos perversos de especulación financiera implicados, estos proyectos sustraen grandes áreas de biodiversidad al ámbito público, constituyendo la apropiación privada de la biodiversidad y la hiper-tecnificación de su manejo, que reduce a los pueblos indígenas y nativos al papel de “guardianes del bosque”, renunciando a sus relaciones tradicionales con la naturaleza y, en última instancia, con su vida cotidiana monitoreada vía satélite, subordinando toda su existencia a los accionistas de los proyectos.

Al mismo tiempo, con escaso o nulo reconocimiento por parte del sistema político, proliferan en la región los movimientos sociales de base territorial, que defienden sus formas tradicionales de vida contra la reconstrucción y reapropiación

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

de territorios impulsada por los capitales y los Estados. Se han ido conformando coaliciones plurales, de base local pero en articulaciones globales. Se trata de movimientos basados en lógicas de auto-organización, y cuya identidad política está basada en sus raíces locales.

En la configuración territorial tradicional de los países latinoamericanos, las áreas ricas en biodiversidad constituyeron también el refugio de pueblos indígenas y afro-americanos, que sobrevivieron adoptando formas sostenibles de manejo de los recursos naturales. Sus identidades unieron así cultura, etnicidad, tradición histórica y relación con ecologías localizadas. Esos territorios se han configurado como los nuevos frentes territoriales de expansión de capital, y es en esas regiones donde, en todos los países, se libran los principales conflictos sociales.

Comparativamente, las ciudades latinoamericanas, algunas de las cuales se cuentan entre las mayores metrópolis del mundo, han degradado su carácter tradicional de espacio preferencial de la política. Por un lado, porque las nuevas relaciones laborales flexibilizadas durante el apogeo neoliberal, han erosionado la capacidad política de las estructuras sindicales tradicionales; siendo aún un actor político importante, están absorbidas por luchas defensivas sectoriales. Por otro lado, porque algunos de los nuevos regímenes políticos, como el brasileño, han otorgado un papel privilegiado a las dirigencias sindicales en los cuadros superiores del aparato del Estado y en la gestión de los fondos de pensión.

En varios países, notablemente en Chile, pero también en México, en Colombia o en Argentina, ha reaparecido el movimiento estudiantil como un actor político significativo. Y, de la misma forma que en las áreas agrícolas y en los espacios naturales, se desarrollan en las ciudades movimientos plurales que se enfrentan con las consecuencias de la crisis urbana, la precariedad de los servicios públicos, las carencias de infraestructura, los proyectos de obras públicas megalománicas (como es el caso de Rio de Janeiro y los proyectos vinculados con la sede del Campeonato Mundial de Fútbol y las Olimpíadas).

Pero ese cuadro de crisis urbana se agrava con la erosión de la capacidad de los poderes públicos para asumir un control efectivo del espacio de la ciudad, y el desafío constituido por el control territorial de porciones de las mismas por organizaciones armadas, siempre vinculadas, de una forma u otra, con las operaciones del tráfico de drogas y respaldadas por la corrupción de las instituciones policiales. En la vida cotidiana de muchísimas ciudades latinoamericanas (no solamente las metrópolis) se han instalado situaciones virtuales de guerra civil ("*pequeñas guerras crueles*", las denomina el investigador francés Alain Joxe), que someten a la población, especialmente a los sectores

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

populares, a atrocidades sin fin (la guerra del tráfico en México provocó en 2011 nada menos que 22.000 muertes!!!). Una solución paradójica, implantada justamente por gobiernos democráticos, ha sido la militarización de las áreas urbanas críticas. Ese camino, si bien a corto plazo obtuvo resultados positivos, trae implícito a mediano y largo plazo el peligro de un “facismo social” institucionalizado, con seguridad democrática para los sectores sociales más beneficiados y control militar de los sectores populares pobres. Volviendo a nuestra caracterización del principio, la homogeneidad y continuidad de mecanismos políticos democráticos en los países iberoamericanos coincide con compromisos de riesgo para los derechos humanos de las poblaciones más carentes y excluidas, tanto en los espacios urbanos como en las áreas de abundancia de recursos naturales.

Para finalizar con estos escuetos apuntes, vale la pena registrar una nota positiva. Me refiero a la inspiración pionera de las recientes constituciones de la República del Ecuador (2008) y del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), que han establecido cuestionamientos a las propias bases de la modernidad. Se trata del reemplazo en estos textos constitucionales de la noción de “desarrollo” (siempre vinculada connotativamente con la idea de acumulación y crecimiento cuantitativo) por la de “Buen Vivir”, una visión de la vida social vinculada más con la satisfacción de necesidades básicas y promoción y preservación de la calidad de vida. Y, junto con esto, la afirmación de los denominados “derechos de la naturaleza”, donde la Pachamama de las tradiciones indígenas del continente, en un movimiento que se coloca en la frontera de la modernidad de raíz occidental, pasa a ser sujeto de derechos. Paradójicamente, estas afirmaciones constitucionales son con frecuencia contradecidas por los proyectos extractivistas de los propios gobiernos que han convocado a la elaboración de esas constituciones.

Quiero registrar, entonces, la importancia de un diálogo y una colaboración de las fuerzas políticas europeas comprometidas con la búsqueda de alternativas para la crisis civilizatoria y planetaria con los sectores populares latinoamericanos que están movilizados y luchando por objetivos de justicia social y ambiental, por una defensa de derechos humanos que son también derechos de la naturaleza.

Creo que además del apoyo político concreto, desde Alemania se podría hacer mucho, también, con el aporte de ideas y de tecnologías que fortalezcan la capacidad crítica de estos movimientos, pero también su capacidad para proponer alternativas. Y me parece que ese aporte, claro está, también debería ser ofrecido al sector público en todos los niveles, como forma de acompañar la necesaria re-invencción del Estado, la reclasificación de sus funcionarios y la redefinición de la naturaleza de su gestión.

Grüne Lateinamerika Konferenz 10.11.2012

Y este diálogo, me importa decirlo, sólo puede ser establecido a partir del respeto por la diversidad cultural. América latina es la región del planeta con mayores desigualdades sociales. Hemos puesto nuestra cuota de lucha, de esperanza y de sufrimiento para la construcción de un futuro mejor, para nosotros y para toda la humanidad. Debemos ser considerados a partir de nuestra propia experiencia histórica, y no ser juzgados desde criterios que nunca fueron vigentes en nuestra realidad, como el modelo de democracia liberal o de Estado benefactor de prosperidad que caracterizó la realidad europea. Sin rechazar las promesas emancipatorias de la modernidad occidental, queremos construir en diálogo con ella nuestro propio camino de modernidad, en el proceso que el filósofo argentino Enrique Dussel llama “transmodernidad”. Estamos en la búsqueda de vías alternativas para construir una auténtica democracia, basada en la justicia social y el buen vivir, con la vigencia efectiva de derechos humanos, políticos y sociales para el conjunto de nuestras poblaciones.

Héctor Alimonda